

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA CUARTA DE DECISION LABORAL

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTE	Carlos Mario González González
DEMANDADO	AFP Porvenir S.A., Protección S.A. y Colpensiones
PROCEDENCIA	Juzgado 009 Laboral del Cto. de Medellín
RADICADO	05001 3105 <b>009 2023 00041</b> 01
INSTANCIA	SEGUNDA
PROVIDENCIA	SENTENCIA Nro. 200 de 2023
TEMAS Y SUBTEMAS	Ineficacia de traslado
DECISIÓN	Confirma

En la fecha, **treinta (30) de octubre de dos mil veintitrés (2023)**, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral integrada por las magistradas: María Eugenia Gómez Velásquez, Luz Patricia Quintero Calle y como ponente, Luz Amparo Gómez Aristizábal, procede a emitir pronunciamiento frente al recurso de apelación interpuesto por la **AFP Porvenir S.A.** y el grado especial de consulta para **Colpensiones**, ordenado en sentencia proferida por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito dentro del proceso ordinario promovido por **Carlos Mario González González**, donde también fue demandada **Protección S.A.**. Radicado único nacional 05001 3105 **009 2023 00041** 01.

**Auto:** en los términos y para los efectos del poder conferido, se le reconoce personería jurídica al abogado Nelson Eduardo Pantoja Gómez, para que continúe con la representación de Colpensiones.

La Magistrada ponente, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración el proyecto discutido y aprobado mediante acta N°. **025**, que se plasma a continuación:

## **Antecedentes**

Pretende el actor la declaración de ineficacia del traslado realizado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al de Ahorro Individual con Solidaridad. Como resultado, busca que las demandas devuelvan a Colpensiones la totalidad de aportes, bonos pensionales, cotizaciones, sumas adicionales y, rendimientos financieros. Por último, reclama la condena en costas.

En sustento de ello afirma que, se afilió al extinto ISS el 24 de mayo de 1988, trasladándose al régimen de ahorro individual con solidaridad a través de Horizonte el 20 de enero de 2002, con cambió a Protección el 22 de enero de 2010, entidad en la que se encuentra actualmente. Precisa que al momento de la suscripción de los formularios las AFP omitieron su deber de información, respecto de las consecuencias que le acarrearía dicho acto, pues se limitaron a indicarle que tendría más beneficios económicos, entre ellos una pensión mas favorable que la que le otorgarían en el régimen de prima media. Afirma que le no realizaron una evaluación de su situación pensional, no le explicaron la negociación del bono pensional, los requisitos que debía acreditar en uno y otro régimen a fin de obtener la prestación de vejez, entre otras, induciéndolo a error y asaltándolo en su buena fe. Esgrime que petitionó, el 27 de octubre de 2022, ante Colpensiones su retorno, con respuesta desfavorable. Asevera que Protección le realizó una proyección de la pensión, mostrándole que en dicho fondo la misma ascendería al mínimo mientras que en Colpensiones sería de \$3.535.546,00.

En auto del **09 de febrero de 2023**, se admitió y ordenó dar trámite a la acción. Debidamente enteradas de la actuación, las entidades vinculadas por pasiva allegaron escritos de contestación así:

**La AFP Porvenir S.A.**, acepta que el demandante suscribió formulario de afiliación el 20 de enero de 2002 con Horizonte, aclarando que esta sociedad fue fusionada por absorción con Porvenir mediante escritura publica de 2013, por lo que a la fecha del traslado eran AFP independientes. Los restantes supuestos no son ciertos o no le constan, no obstante, sostiene que, al momento de la firma del acto de incorporación, se informó al actor sobre los requisitos y los diferentes aspectos que se tendrían en cuenta para adquirir una pensión dentro del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS). También se le explicaron los beneficios del régimen, como la posibilidad de los herederos de disponer del capital en caso de que el afiliado fallezca antes de acceder a su prestación, las opciones de pensión mínima y sus requisitos, los rendimientos financieros y los diferentes escenarios relacionados con ellos, así como la destinación y uso de los aportes. Además, se le comunicó sobre los descuentos mensuales para gastos de administración, los cuales se verían reflejados en los rendimientos que generaran sus aportes. Se le ofreció protección y el pago de la prima de un seguro de vida e incapacidad, todo de acuerdo con lo establecido en la Ley 100 de 1993. Afirma que el asesor cumplió con su deber legal de actuar de manera diligente y que, en el momento de la vinculación, se explicaron de manera clara y comprensible las características del régimen al que se estaba afiliando y sus diferencias con el Régimen de Prima Media (RPM), adicional a que se pusieron a su disposición todos los canales de atención, como la página web, las oficinas de servicio, las líneas de atención al cliente y la aplicación móvil, para que tuviera la oportunidad de consultar cualquier duda relacionada con su futuro pensional. Finalmente adujo que su actuación se ha regido por los valores de integridad, diligencia y prudencia, y que siempre ha facilitado el acceso a la información de sus afiliados sin recurrir a engaños o inducción a error, a más que el señor

Carlos al firmar el formulario de afiliación, entendió y aceptó las diferentes características y beneficios del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) de manera voluntaria. **Enfrentó las pretensiones y exhibió excepciones de mérito tendientes a enervarlas**, las que denominó: buena fe, ausencia de requisitos legales para que se declare la nulidad o ineficacia del traslado, aceptación tácita de las condiciones del RAIS y, enriquecimiento sin justa causa derivado de la omisión de la figura de restituciones mutuas.

**Colpensiones**, de los hechos tiene como ciertos, la vinculación del señor Carlos al régimen de prima media con prestación definida, la petición de retorno y la respuesta brindada. Los demás supuestos no le constan al ser supuestos frente a los cuales no tuvo ninguna participación o injerencia. **Se opuso** a la prosperidad de las pretensiones y formuló **las excepciones** de improcedencia de la declaratoria de la ineficacia del traslado de régimen, prescripción, buena fe, imposibilidad de condena en costas y la innominada o genérica.

**Protección S.A.**, manifiesta no constarle o no ser ciertas las circunstancias fácticas narradas en la demanda. En su defensa indica que en ningún momento faltó a su deber de información, pues brindó una amplia asesoría oportuna, pertinente, objetiva y comprensible al demandante, de acuerdo con la normatividad vigente en ese momento, lo cual quedó plasmado en el formulario de vinculación. Sostiene que la incorporación al fondo se realizó de manera horizontal, lo que significa que el demandante previamente conocía y aceptaba el funcionamiento del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, razón por la cual el acompañamiento se dio sobre las características propias del RAIS, que incluyen la construcción de un ahorro en una cuenta individual donde se depositan todos los aportes pensionales a lo largo de la vida, generando rendimientos financieros de acuerdo con el comportamiento del mercado. Además, se le enseñó que el monto de la

pensión en el RAIS es variable y depende de diversas circunstancias y condiciones particulares de cada afiliado, como la edad, los beneficiarios, la expectativa de vida según la tabla de mortalidad de rentistas, el saldo de la cuenta de ahorro individual (capital, bono y rendimientos), el factor actuarial, los aportes voluntarios y la regulación de la Superintendencia Financiera y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para liquidar la mesada. También se le dijo sobre la posibilidad de optar por una pensión a una edad anticipada, siempre y cuando contara con el capital suficiente para financiarla, de acuerdo con el artículo 64 de la Ley 100 de 1993. Se le explicó la figura de la Garantía de Pensión Mínima de Vejez a la que tendría derecho en caso de no acumular el capital requerido, siempre y cuando superara los requisitos de edad y semanas exigidos en el artículo 65 de la Ley 100 de 1993. Además, se le mencionó la posibilidad de obtener excedentes de libre disponibilidad.

**Resistió las pretensiones** y propuso excepciones tendientes a enervarlas tales como: inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, aprovechamiento indebido de los recursos públicos y del sistema general de pensiones, innominada o genérica e inexistencia de la obligación de devolver seguros previsionales y comisiones de administración por falta de causa y afectar derechos de terceros.

La primera instancia **terminó con sentencia** proferida por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito, el 24 de agosto del presente año, declarando la ineficacia de la afiliación realizada por el señor **Carlos Mario González** al RAIS, entendiéndose que siempre permaneció, sin solución de continuidad, en el régimen de prima media. Condenó a Porvenir S.A. y Protección S.A., a que dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria del fallo, trasladen a Colpensiones el *"saldo existente en la cuenta de ahorro individual del demandante el señor CARLOS MARIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ junto con sus correspondientes rendimientos financieros, frutos e intereses y los bonos pensionales si hubieren sido ya redimidos y contar con sus propios recursos deberá trasladar con indexación lo descontado por el fondo de garantía de pensión mínima los gastos de administración y el valor de primas de seguro*

*previsional y reaseguros, al momento de cumplirse esta orden los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores junto con el detalle pormenorizado de los ciclos IBC, aportes y demás información relevante que los justifique.*” Le ordenó a Colpensiones recibir las sumas que le sean giradas e incorporarlas como semanas válidamente cotizadas. Declaró no probada la excepción de prescripción e impuso costas a cargo de las AFPs del RAIS, fijando el monto de las agencias en derecho.

La a quo hizo referencia a las normativas aplicables al caso y a la jurisprudencia del máximo órgano de la justicia laboral ordinaria, en la que se sostiene que, al realizar un cambio de régimen, la entidad que lo promueve debe cumplir con la obligación de examinar las circunstancias particulares del afiliado, y explicar si dicho acto le beneficia. Esto implica brindar información detallada sobre las ventajas y desventajas, así como los requisitos y características de las prestaciones económicas y los regímenes involucrados, lo cual asegura que tenga un conocimiento completo de las implicaciones legales del cambio, sin que sea suficiente simplemente llenar un formulario y aseverar que el acto fue voluntario y, sin que los fondos en cuestión, para el caso, cumplieran con la obligación de probar la asesoría suministrada, a pesar de que recaía sobre ellos tal carga procesal, lo que llevó a la decisión de declarar la ineficacia del cambio con las restituciones anotadas.

El **recurso de apelación** fue interpuesto por la apoderada de la **AFP Porvenir S.A.**, cuestionando específicamente el contenido del numeral segundo, referente a la devolución de los recursos debidamente indexados. Para respaldar su argumento, indica que ya entregó todos los aportes del demandante al fondo de su elección, lo que hace que la orden de actualización sea innecesaria y redundante. Sostiene que la indexación tiene como objetivo traer el dinero a su valor presente para evitar la pérdida de su poder adquisitivo debido a la inflación. En este caso, las sumas relacionadas con los gastos de administración no han perdido su valor adquisitivo; por el contrario,

contribuyeron a aumentar el saldo en la cuenta de ahorro individual. Visión que es respaldada por el Tribunal Superior de Cali al señalar que la indexación no es necesaria, ya que los rendimientos obtenidos superan con creces cualquier pérdida.

Indica que condenar a devolver las sumas debidamente indexadas generaría un enriquecimiento sin justa causa en favor de Colpensiones y de la parte actora.

En favor de Colpensiones se conoce en el grado jurisdiccional de consulta.

De la etapa de alegaciones ante esta instancia hizo uso **Porvenir S.A.**, sosteniendo que no procede la devolución de los gastos administrativos, ya que esta deducción tiene respaldo en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993. Argumenta que esto demuestra que no fue un descuento discrecional de la entidad. Además, plantea que si se exige la devolución de este concepto, no sería posible transferir a Colpensiones los rendimientos generados en la cuenta de ahorro individual, ya que estos se generan debido a la deducción de los gastos y respaldan la buena administración de la entidad. Por lo tanto, sostiene que dicha orden no tendría sustento legal ni fáctico.

Manifiesta que no es necesario aplicar la indexación a las sumas a retornar, ya que los gastos administrativos no han perdido su poder adquisitivo, sino que, por el contrario, han aumentado significativamente el saldo de la cuenta de ahorro individual del demandante. Por lo tanto, no existe motivo para indexarlos. Además, menciona una sentencia del Tribunal de Cali que respalda la idea de que no es necesario aplicar la actualización, ya que el retorno de los rendimientos compensa cualquier depreciación del poder adquisitivo de la moneda debida a la inflación.

Finalmente, alega que no es procedente emitir una condena en costas, ya que actuó de buena fe y se ha acreditado que todas las actuaciones se realizaron de conformidad con la voluntad de las partes y el interés del actor de permanecer en el régimen.

**Colpensiones**, presentando oposición a la declaratoria de ineficacia, para ello resalta varios puntos: **1.** La Inoponibilidad: la cual implica que la ineficacia o nulidad de un acto no afecta a terceros de buena fe. En este caso, al ser la entidad un tercero de buena fe y que esta figura protege la seguridad jurídica y los intereses patrimoniales de terceros, no se le pueden atribuir los efectos del acto declarado ineficaz. **2.** Responsabilidad de las entidades de seguridad social sui generis (propia), la cual va más allá de los contratos de aseguramiento y en consideración de la sostenibilidad financiera del sistema y la planeación de la reserva pensional. **3.** Juicio de proporcionalidad y ponderación: debiendo evaluarse si la ineficacia es la más adecuada, en tanto, puede tener un impacto desproporcionado en Colpensiones. Se sugiere que, en su lugar, la AFP asuma la carga económica o que se realice un estudio actuarial para determinar la devolución de los dineros trasladados al RAIS. **4.** Hace alusión a la Sentencia SL 373-2021 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que moderó el precedente respecto a la posibilidad de revertir los efectos de la ineficacia del traslado. Se argumenta que, una vez que una persona adquiere la calidad de pensionado, no es posible deshacer ciertos efectos económicos y financieros.

Finalmente, se solicita que, en caso de que se concedan las pretensiones de la parte demandante, se devuelvan todos los dineros depositados en la cuenta de ahorro individual, incluyendo cuotas de administración, rendimientos y utilidades, entre otros.

En orden a decidir, basten las siguientes,



## Consideraciones:

Como hechos debidamente acreditados se tienen: la vinculación del demandante al RPM, el 24 de mayo de 1988; su tránsito al RAIS a través de **Horizonte hoy Porvenir S.A.**, con formulario suscrito el 20 de enero de 2002, y posterior cambio a la **AFP Protección S.A.**, el 22 de enero de 2010. Según historia laboral aportada por Protección generada el 01 de marzo de 2023, el actor acredita un total de 1.297,29 semanas, de las cuales 284,86 fueron aportadas en otro régimen, 364,29 en otro fondo y 648,14 en dicha entidad.

De acuerdo con el recuento realizado, los argumentos de la apelación y el grado jurisdiccional de consulta para Colpensiones, **el problema jurídico** en esta instancia se circunscribe a establecer, si hay lugar a la declaratoria de ineficacia de la inscripción del demandante al RAIS a través de **Horizonte hoy Porvenir S.A., con movilidad a Protección S.A.**, y como consecuencia de ello, a su inmersión automática en el RPM, con las correspondientes restituciones económicas, los conceptos que estas comprenden y si se debe ordenar o no su actualización mediante el mecanismo de la indexación.

Pues bien. Reiterada ha sido la línea de la jurisprudencia **mayoritaria** de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, desde el año 2008, en torno a la **carencia de efectos jurídicos del traslado de régimen pensional cuando no está precedido de una suficiente, completa, clara, comprensible y oportuna información, sobre las reales implicaciones de abandonar el régimen de prima media con prestación definida y sus posibles consecuencias futuras**. Para el caso concreto, teniendo en cuenta que la migración se dio **20 de enero de 2002 y posteriormente el traslado entre el mismo régimen el 22 de enero de 2010**, se estaba en el primero y segundo estadio de la

regulación normativa, contenida entre otras en los arts. 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993, art. 97, numeral 1° del Decreto 663 de 1993, disposiciones constitucionales relativas al derecho a la información, no menoscabo de derechos laborales y autonomía personal, y **para la última fecha estaba ya vigente la Ley 1328 del 15 de julio de 2009**, luego, el contenido mínimo estaba circunscrito frente al acto inicial a la **ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales**, y suponía el análisis de la situación particular de cada afiliado ante el sistema; y **para el mes de enero de 2010, en que transitó a Protección**, se requería: *el análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y los pormenores de los regímenes pensionales, a fin de que el asesor o promotor pueda emitir un consejo, sugerencia o recomendación ... acerca de lo que más le conviene y, por tanto, lo que podría perjudicarle*, estando también definido jurisprudencialmente que tal información constituye:

*... una expresión de responsabilidad en una actividad profesional que se ejecuta en el marco regulatorio del servicio público de Seguridad Social, bajo la dirección, coordinación y control del Estado, según lo dispone el artículo 48 de la CP, siendo las dos primeras actividades mencionadas una manifestación típica de la política pública y, la última, una materialización de la inspección y vigilancia que corresponde ejercer a través del ente especializado para el efecto. Ver sentencia SL4322-2022.*

Y,

*... en cuanto al deber de información exigible a las AFP, esta Corporación ha considerado que desde que se implementó el Sistema Integral de Seguridad Social en pensiones y se concibió la existencia de las AFP, se estableció en cabeza de estas el deber de ilustrar a sus potenciales afiliados, en forma clara, precisa y oportuna, acerca de las características de cada uno de los dos regímenes pensionales, con el fin de que pudieran tomar decisiones informadas (CSJ SL12136-2014, CSJ SL17595-2017, CSJ SL19447-2017, CSJ SL1452-2019, CSJ SL1688-2019, CSJ SL1689-2019, CSJ SL3464-2019, CSJ SL4360-2019, CSJ 2611-2020, CSJ SL4806-2020, entre otras).*

*Lo anterior, comoquiera que desde la creación de las AFP, el Decreto 663 de 1993, «Estatuto Orgánico del Sistema Financiero», prescribió en el numeral 1.º del artículo 97 la obligación de las mismas de «suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado» y la Ley 795 de 2003, «Por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero*

*y se dictan otras disposiciones», recalcó en su artículo 21 este deber preexistente de información a cargo de las AFP, en el sentido que la información suministrada tenía como propósito no solo evaluar las mejores opciones del mercado sino también la de «poder tomar decisiones informadas».*

Sin que en el **caso concreto** se haya demostrado por el fondo privado la debida ilustración a la parte actora, ni se puede inferir del formulario con leyenda preimpresa de libertad y voluntariedad, ya que según el precedente vertical:

... la simple firma del formulario, al igual que las afirmaciones consignadas en los formatos pre-impresos, tales como «*la afiliación se hace libre y voluntaria*», «*se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones*» u otro tipo de leyendas de este tipo o aseveraciones, son insuficientes para dar por demostrado el deber de información. Esos formalismos, a lo sumo, acreditan un consentimiento sin vicios, pero no *informado* (CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31314, CSJ SL, 22 nov. 2011, rad. 33083, CSJ SL4964-2018, CSJ SL12136-2014, reiterada en CSJ SL19447-2017, CSJ SL4964-2018, CSJ SL1421-2019, CSJ SL2877-2020, CSJ SL373-2021 y CSJ SL1108-2022).

Ni es viable estimar improcedente la ineficacia por no estarse ante una expectativa legítima, un derecho consolidado, no gozar el afiliado de transición, o por estar motivado el retorno a Colpensiones en la diferencia de la mesada (ver sentencia SL1055-2022), y menos es posible aplicar el aforismo de conocimiento de la ley, por ser el tema pensional de carácter técnico, o hacer recaer en la afiliada la obligación de instruirse, así se explica, entre otras en sentencia SL1197-2021:

*Así lo es, pues **en su disertación llega al punto de postular que era la accionante la que debía tener conocimiento de aquellos presupuestos**, contrario a ello, debió el Colegiado considerar que el deber de información debió ser veraz, oportuno e insoslayable en este campo de la seguridad social. **Las AFP tienen la imperativa obligación de brindar una asesoría suficiente, y por ello, si el afiliado alega que no fue así, como aquí ocurrió, el Tribunal debía entonces contraer su atención en elucidar si ese deber se satisfizo o no, con pruebas que lo demuestren de forma contundente, más aún, si aquella está, tal y como se indicó en el precedente transcrito, en mejor posición que los afiliados, para demostrar esas circunstancias.*** Negritas extra texto.

Y en lo atinente al tema de las proyecciones pensionales, en sentencia SL4322-2022, se expone que no es factible afirmar,

*... que para la época en que el demandante se trasladó, la selección del régimen pensional no tenía relación con el monto de la pensión, **pues lo que se espera al momento del traslado no es precisamente que se le informe el valor futuro de la prestación, sino que se le explique que aquella depende del capital acumulado en la cuenta individual**, por lo que, las AFP como expertas en el aseguramiento de los riesgos de invalidez, vejez y muerte, cuentan con los soportes técnicos, estadísticos y actuariales para realizar proyecciones del capital que en el tiempo puede acumular el afiliado para acceder a su derecho pensional, teniendo en cuenta las condiciones particulares de cada uno al momento del traslado, como la edad, sexo, nivel de ingreso, persistencia en la cotización, etc; información con que cuenta la AFP por encontrarse registrada en el formulario de afiliación y en la historia laboral del afiliado.*

*Así mismo, advierte el juzgador de alzada que la solicitud del demandante de retornar a Colpensiones no se realizó dentro de los plazos previstos, según las sentencias de la Corte Constitucional que citó en la providencia; **sin embargo, resultaría ser un desaguizado centrar el análisis en los períodos definidos en la ley para hacer traslados entre regímenes, o la limitante para realizarlo cuando le falten menos de diez (10) años para alcanzar la edad requerida, puesto que lo pretendido siempre fue la nulidad y/o ineficacia del traslado efectuado a la AFP Horizonte hoy Porvenir S.A., con lo cual, se desdibujaría por parte del Colegiado de instancia el pedimento efectuado desde el escrito inaugural (CSJ SL1475-2021).** Negrillas intencionales.*

Tampoco se sana tal vicio por la movilidad entre administradoras del RAIS ni por los actos de relacionamiento; luego, acertada resulta la declaratoria de **ineficacia** o la exclusión de todo efecto jurídico al acto de traslado y de movilidad entre administradoras dispuesta por la primera instancia, siendo sus consecuencias idénticas a las de la nulidad – vuelta al estado anterior, explicándose por la Sala de Casación Laboral que en estos casos las AFP debe reintegrar a **Colpensiones los saldos obrantes en la cuenta de ahorro individual, junto con sus rendimientos**. Y también deberán devolver todos los fondos privados el porcentaje correspondiente a los gastos de administración, primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, y el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima, debidamente indexados y con cargo a sus propios recursos, por el tiempo de permanencia en cada uno, obligación que surge, entre otras,

a partir de las sentencias **SL3202-2021, SL3706, SL3707, SL3708, SL3710, SL3349-2021, SL4803-2021, SL4609-2021** reiteradas, entre otras en las **SL755-2022, SL756-2022, SL843-2022, SL1019-2022, SL1055-2022, SL2484-2022, SL4322-2022 y SL554-2023**, sin que sea una decisión caprichosa, **pues como ya se advirtió se acata el precedente vertical reiterado en más de 3 providencias que constituyen doctrina probable.**

Desde este punto de vista, no se estaría generando enriquecimiento sin causa en favor de COLPENSIONES o del demandante, y tampoco doble condena o un desmedro de los fondos, ya que se trata de la reivindicación de unas sumas que integran la cotización y que deben dirigirse a la administradora a la que ha pertenecido siempre sin solución de continuidad, máxime que fue la conducta de las AFP la que generó la ineficacia aquí declarada, **razones por las que se confirma en su integridad el fallo revisado.**


En cuanto a la condena en costas, es importante señalar que estas son simplemente una consecuencia procesal del ejercicio de una acción o excepción. Esto se traduce en una obligación que se dirige contra el patrimonio de la parte vencida, otorgando al vencedor el derecho de reintegro de los gastos procesales en los que se haya visto obligado a incurrir (auto Sala de Casación laboral Corte Suprema del 24 de enero de 2007, radicado 31.155, reiterado en sentencia SL 5141-2019- autos CJS AL3132-2017, CSJ AL3612- 2017, CSJ AL5355-2017, CSJ AL2924-2022, CSJ AL2952-2022 y CSJ AL5445-2022), de suerte que no interesa para su imposición que se haya actuado de buena o mala fe (CSJ AL4123-2019), por tal se confirma la sentencia en este apartado, y **al desatarse adversamente el recurso vertical**, también se imponen en esta instancia a cargo de Porvenir S.A, inclúyanse como agencias en derecho la suma de \$1.160.000,00, en favor del demandante.

En mérito de lo expuesto, la **Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Medellín**, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **confirma** la sentencia proferida por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito dentro del proceso ordinario promovido por **Carlos Mario González González**, contra las **AFP Protección S.A., Porvenir S.A. y Colpensiones**.

Costas en esta instancia a cargo de la AFP Porvenir S.A., a quien se desata adversamente el recurso. Las agencias en derecho se fijan en la suma de **\$1.160.000,00 a favor del demandante**.

Lo resuelto se notifica a las partes por **EDICTO**, que se fijara por **secretaria por el término de un día**, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

**Las magistradas** (firmas escaneadas)



**LUZ AMPARO GÓMEZ ARITIZABAL**



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



**LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE**

**Con aclaración de voto**

## **ACLARACIÓN DE VOTO**

### **Proceso Ordinario Laboral – Ineficacia de traslado**

Aunque acojo la decisión de la Sala, resulta necesario aclarar que, desde un punto de vista estrictamente jurídico, no comparto las consideraciones reiteradas por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en asuntos de esta índole, referentes a la nulidad o ineficacia del traslado entre regímenes pensionales, razón por la cual había adoptado decisiones apartándome razonadamente del criterio de la alta Corporación, en particular del vertido en providencias cuyas consideraciones en su momento no contaban con mayoría, concentrando el análisis en lo dispuesto en la normatividad vigente en la fecha de suscripción del acto jurídico de traslado, respecto a la validez de los actos jurídicos en general y del traslado de régimen en particular, así como las cargas probatorias, y los matices relevantes de las decisiones adoptadas hasta el año 2019, todo ello en virtud de la autonomía e independencia judicial, conforme a las circunstancias fácticas de cada caso, las afirmaciones y condiciones particulares de las partes, y las pruebas allegadas y practicadas en cada proceso, según lo dispuesto en los art. 60 y 61 del CPTSS.

Empero, con ocasión de las decisiones emitidas por la Sala de Casación Laboral de la Alta Corporación (entre muchas, la providencia CSJ STL3201-2020), en las que no solo se dejaron sin efecto las sentencias proferidas en segunda instancia, sino que se exhortó a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, (que la suscrita integraba) a acatar el precedente, y a cumplir de manera rigurosa el deber de transparencia y carga argumentativa suficiente al apartarse del precedente judicial emanado de esa Corporación en los asuntos de ineficacia de traslado de régimen, pese a que en todos ellos efectivamente se había cumplido con esa carga; bajo el mandato contenido en el referido exhorto, que fue varias veces reiterado, acompaño la decisión, acatando en todos los asuntos de esta naturaleza, el criterio del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral.

Hasta acá, el planteamiento de mi aclaración de voto.



**LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE**

**Magistrada**